

A continuación se acompaña el borrador de presentación que hemos revisado para potencialmente ser presentado en Contraloría. El documento va con cambios incorporados.

BORRADOR

**En lo principal: solicita pronunciamiento; Otrosí: Señala forma de notificación que indica.**

**SRA. CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (S)**

\_\_\_\_\_, C.I. \_\_\_\_\_, profesión, domiciliada para estos efectos en \_\_\_\_\_, a UD., respetuosamente digo: Que, en virtud de los artículos 98, 99 y 100 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en la ley orgánica N° 10.336, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, solicito emitir un pronunciamiento, en relación a la factibilidad de impartir instrucciones o eventualmente un dictamen disponiendo un acta de traspaso en los gobiernos regionales al término del mandato de los gobernadores regionales, como una medida de transparencia y buenas prácticas, tal como lo dispone para el caso de los municipios, el art. 67 de la Ley Orgánica de Municipalidades por las razones que paso a exponer:

-En octubre próximo se llevará a cabo la elección de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales, coincidiendo con el término del primer período de Gobernadores Regionales electos, cargo de elección popular que tuvo lugar luego de la dictación de la ley N°21.073, que modificó la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional. Como ha sido de público conocimiento, el primer período de Gobernadores Regionales electos, no ha estado exento de dificultades en cuanto al manejo presupuestario, la ejecución de los recursos y la implementación de la ley 21.074, que también modificó la ley orgánica sobre gobierno y administración regional.

-El artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional, dispone que: “el gobernador regional, en el mes de mayo de cada año, dará cuenta al consejo regional de su gestión como ejecutivo del gobierno regional, a la que deberá acompañar el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera. La cuenta pública, el balance de ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera deberán ser publicados en la página web del correspondiente gobierno regional. El incumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado causal de notable abandono de sus deberes por parte del gobernador regional”.

-Sin embargo, no se contempla una disposición expresa relacionada con la obligación de confeccionar un acta de traspaso de la gestión al término del mandato de los Gobernadores Regionales, ni los

contenidos que debiera incluir dicha acta, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los Alcaldes, donde el art. 67 de la Ley Orgánica de Municipalidades, dispone: “El alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Deberán ser invitados también a esta sesión del concejo, las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales, regionales, y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva. La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer referencia a lo menos a los siguientes contenidos: a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales cuando corresponda; b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados; c) La gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad pública vigente, dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo del plan comunal de seguridad pública; d) La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública, dando cuenta especialmente del porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros; e) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento; f) Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte, las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia, y de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal; g) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de entidades; h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal; i) Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de educación y salud, cuando estos sean de administración municipal, tales como el número de colegios y alumnos matriculados; de los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales que se efectúen por el Ministerio de Educación; de la situación previsional del personal vinculado a las áreas de educación y salud; del grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel comunal; j) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos; k) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local, y l) Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la asignación de aportes en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos disponibles en la cuenta especial, la programación de obras para el año siguiente y las medidas de mitigación directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto de aportes al espacio público recepcionadas y garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando, además, las garantías a que alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que obren en su poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de garantías. Un extracto de la cuenta pública del alcalde deberá ser difundido a la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada por el alcalde deberá estar a disposición de los ciudadanos para su consulta. Asimismo, el alcalde deberá hacer entrega, al término de su mandato, de un Acta de Traspaso de Gestión, la que deberá consignar la información consolidada de su período alcaldicio, respecto de los

contenidos indicados en el inciso segundo del presente artículo, así como de los contratos y concesiones vigentes. Dicha Acta deberá ser suscrita por el secretario municipal y el jefe de la unidad de control. Sin embargo, podrán no suscribirla si no estuviesen de acuerdo con sus contenidos, debiendo comunicar ello al alcalde que termina su mandato. El Acta de Traspaso de Gestión se entregará tanto al alcalde que asume como a los nuevos concejales que se integrarán, a contar de la sesión de instalación del concejo. El no cumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado causal de notable abandono de sus deberes por parte del alcalde.

-Por último, existe un proyecto de ley presentado por el ejecutivo, mensaje boletín N°15921-05 que se encuentra en primer trámite legislativo en la comisión de hacienda de la cámara de diputados, que aborda esta materia y que propone un nuevo art. 26 ter: “Antes del término de su mandato, el gobernador regional deberá hacer entrega de un acta de traspaso de gestión que deberá consignar información consolidada de su periodo, incorporando los contenidos siguientes: a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, incluyendo la etapa de cumplimiento de su programación financiera; b) Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos los aportes e inversiones realizadas en cada una de las iniciativas y los proyectos concluidos en el período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento y el instrumento normativo o de planificación que lo contempla; c) Las modificaciones efectuadas al patrimonio regional; d) Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que el gobierno regional sea parte; las resoluciones que respecto del gobierno regional haya dictado el Consejo para la Transparencia; y las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con el gobierno regional; e) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas; f) La constitución de corporaciones o fundaciones o la incorporación del gobierno regional a ese tipo de entidades; y g) Las acciones realizadas para el cumplimiento de la estrategia regional de desarrollo, así como los estados de avance de los planes regionales y programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados. El informe escrito deberá ser publicado en la página web del correspondiente gobierno regional.

Además, dicha acta deberá incluir un informe independiente de auditoría externa sobre la gestión presupuestaria y financiera realizado por alguna de las entidades inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que se refiere el título XXVIII de la ley N° 18.045 de Mercado de Valores. Lo anterior, de acuerdo con las exigencias que establecen las referidas normas, en lo que sea pertinente; y de acuerdo con el procedimiento y oportunidad que establezca un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito además por el Ministerio de Hacienda.

El incumplimiento en la entrega del acta de traspaso de gestión al nuevo gobernador se considerará notable abandono de deberes de parte del gobernador regional saliente.”

Estos son solo algunos antecedentes que dan cuenta del consenso que existe respecto a la necesidad de implementar medidas de control, que permitirían a la Contraloría y a las autoridades electas que asuman el cargo de Gobernador Regional, conocer el estado de las materias más importantes que son de resorte de los gobiernos regionales y que hoy, a la luz de los hechos investigados en varios gobiernos regionales, y que han sido de público conocimiento, refuerzan la necesidad de implementar medidas

que si bien no están establecidas explícitamente en la ley, constituyen buenas prácticas de transparencia para dichas entidades.

Cabe recordar que los Gobiernos Regionales están sujetos a la permanente fiscalización de la Contraloría, y que en conformidad al inciso segundo del artículo 9 del Decreto Número 2421, de 1964, que contiene el texto coordinado, sistematizado y refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, Ley N° 10.336, *“El Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de Servicios o funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores y podrá, también, dirigirse a cualquiera autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda”*. A mayor abundamiento, el artículo 21 de la misma ley dispone que la Contraloría *“(…) podrá exigir informes, declaraciones o datos a cualquier funcionario sujeto a la autoridad de su control.”*

En atención a lo anterior, y a que por primera vez existirá un traspaso de funciones de parte de los Gobernadores Regionales en nuestro país, se estima necesario que la Contraloría instruya a dichas autoridades a entregar un acta de traspaso, que permita fiscalizar adecuadamente y de manera transparente el uso de recursos públicos.

**POR TANTO,**

**Solicito a Ud.,** acceder a lo solicitado y, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, imparta instrucciones o eventualmente un dictamen disponiendo un acta de traspaso en los gobiernos regionales al término del mandato de los gobernadores regionales, como una medida de transparencia y buenas prácticas.

**OTROSÍ:** Para efectos de notificación, solicito se me notifique a través del correo electrónico

---

**POR TANTO,**

**Solicito a Ud.,** acceder a lo solicitado.

**EN LO PRINCIPAL:** Interpone requerimiento de inconstitucionalidad del artículo 12 inciso quinto, del Decreto Supremo N°21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de julio de 2024, que aprueba el Reglamento que establece las directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo; **PRIMER OTROSÍ:** Acompaña documentos que indican. **SEGUNDO OTROSÍ:** Acompaña certificado. **TERCER OTROSÍ:** Solicita alegatos. **CUARTO OTROSÍ:** Designa parlamentario representante y confiere patrocinio y poder; **QUINTO OTROSÍ:** Forma de notificación.

### **EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

Los Honorables Senadores de la República [•], [•], [•], abajo firmantes, que en conjunto representan más de una cuarta parte de Senadores en ejercicio, domiciliados para estos efectos en el Congreso Nacional, avenida Pedro Montt S/N, comuna de Valparaíso, a S.S. Excm., respetuosamente decimos:

Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93° numeral 16, y el inciso décimo noveno del mismo artículo de la Constitución Política de la República de Chile (en adelante “**Constitución**” y “**CPR**”), y los artículos 31° numeral 11, 44°, 110° y 111° del Decreto con Fuerza de Ley N°5, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado el 10 de agosto de 2010, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (en adelante “**LOC del Tribunal Constitucional**”); y cumpliendo con los requisitos que estas normas exigen, venimos en interponer requerimiento de inconstitucionalidad respecto del artículo 12 inciso quinto del Decreto Supremo N°21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento que establece las directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de julio de 2024 (en adelante e indistintamente “**Decreto Supremo N°21**” y “**Decreto Impugnado**”), conforme a los argumentos de hecho y de derecho que se expondrán a continuación.

Durante el curso de este requerimiento, demostraremos:

- A. Que el artículo 12 inciso quinto del Decreto Supremo N°21 contiene una vulneración a los principios y preceptos establecidos en la Constitución**, y en particular de las disposiciones contenidas en los artículos 6°, 7°, 19° numeral 1, 2, 3, y 4, 32° numeral 6, y 63° numeral 4 de la Constitución, al efectuar innovaciones e

incorporar elementos relativos al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social, que conforme a la propia Constitución<sup>1</sup> son materias de ley, y por ende, exigen un debate propio en el seno del Congreso Nacional;

- B.** Que, en efecto, el artículo 12 inciso quinto del Decreto Supremo N°21, **excede la potestad reglamentaria de ejecución otorgada constitucionalmente al Poder Ejecutivo**, sin tener una habilitación legal previa y suficiente, para ser ejercida legítimamente, rebasando su competencia, y regulando vía decreto materias que son propias de ley. A mayor abundamiento, el Decreto Impugnado se dicta en el marco de la ejecución de la Ley N°21.643 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación, y sanción del acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo (en adelante e indistintamente la “**Ley N°21.643**” y “**Ley Karin**”), y dotó de atribuciones al Ministerio del Trabajo y Previsión Social para la dictación de un reglamento que contuviera las directrices para las investigaciones en esta materia, y en este punto, el Decreto Impugnado se excede del marco de reglamentación autorizado al modificar aspectos sustantivos de la Ley N°21.643.
- C.** Que el Decreto Supremo N°21 establece un precedente peligroso que, de asentarse, **permitiría al Poder Ejecutivo legislar por vía de decretos**, contraviniendo las disposiciones constitucionales que reservan exclusivamente al Congreso Nacional el análisis y control sobre ciertas materias, dentro de las cuales se consideran aquellas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social. Esta práctica podría establecer un peligroso patrón que permitiría al Poder Ejecutivo legislar de manera unilateral y sin el adecuado escrutinio legal que garantiza el cumplimiento estricto de las normas establecidas en la Constitución.
- D.** Que la norma del Decreto Impugnado **vulnera los derechos constitucionales de igualdad ante la ley**, así como también, la seguridad de que los derechos fundamentales no serán afectados en su esencia por regulación alguna, consagrados en los artículos 19 numeral 2 y 26 de la Constitución, respectivamente, al eliminar el derecho del trabajador afectado de presentar su denuncia ante la empresa o establecimiento o servicio, según corresponda, cuando la denuncia esté dirigida a aquellas personas señaladas en el artículo 4° inciso primero del Código del Trabajo.

---

<sup>1</sup> Artículo 63 N°4 CPR.

## CAPITULO I

### ANTECEDENTES GENERALES

#### 1. Antecedentes Generales

- A. Con fecha 5 de enero de 2024, se promulgó la Ley N°21.643, cuyo artículo 211-B inciso segundo, encomendó al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, la dictación de un reglamento que establezca las directrices a las que deban ajustarse las investigaciones en esta materia. Lo anterior, en virtud de la potestad reglamentaria de ejecución, reconocida constitucionalmente en el artículo 32° numeral 6 de la Constitución.
- B. En cumplimiento de la referida norma, con fecha 26 de mayo de 2024, se dictó el Decreto Supremo N° 21, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Aprueba el Reglamento que define las directrices para los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral, o de violencia en el trabajo. Dicho acto administrativo fue suscrito por el Presidente de la República, Sr. Gabriel Boric Font, y la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Sra. Jeannette Jara Román.
- C. El Decreto N°21 fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, con fecha 2 de julio de 2024, y, posteriormente, fue publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de julio de 2024.
- D. El artículo 211-B bis de la Ley N°21.463 establece que: *“En caso de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, la persona afectada deberá hacer llegar su denuncia por escrito o de manera verbal a la empresa, establecimiento o servicio, o a la respectiva Inspección del Trabajo. Si la denuncia es realizada verbalmente, la persona que la reciba deberá levantar un acta, la que será firmada por la persona denunciante. Una copia de ella deberá entregarse a la persona denunciante.”* (énfasis agregado)<sup>2</sup>.
- E. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 12 inciso quinto del Reglamento contenido en el Decreto Impugnado, innova al introducir una diferenciación, no regulada por el legislador, señalando que *“Tratándose de una denuncia dirigida a aquellas personas señaladas en el artículo 4° inciso primero del Código del Trabajo, la denuncia*

---

<sup>2</sup> Artículo 211-B bis, Ley N°21.463.

*siempre deberá ser derivada a la Dirección del Trabajo para su investigación”*  
(énfasis agregado)<sup>3</sup>.

En tal sentido, tal como se expondrá en este requerimiento, el artículo 12 inciso quinto del Decreto Impugnado se aparta de su objeto, al limitar el derecho de los trabajadores de optar por presentar la denuncia en forma interna, en la empresa, el establecimiento o servicio, exigiéndose siempre su investigación ante la Dirección del Trabajo, lo que contraviene las disposiciones de los artículos 6°, 7°, 19° numeral 1, 2, 3, y 4, 32° numeral 6, y 63° numeral 4 de la Constitución, según se desarrollará en los acápites siguientes de esta presentación.

## **CAPITULO II**

### **CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA QUE EL REQUERIMIENTO SEA ACOGIDO A TRAMITACIÓN Y DECLARADO ADMISIBLE**

#### **1. Antecedentes constitucionales y legales generales**

Previo al análisis de los vicios de inconstitucionalidad que afectan a la norma impugnada, dedicaremos un breve apartado a revisar el cumplimiento de los requisitos de admisión a trámite y de admisibilidad del requerimiento, sin perjuicio de los argumentos de hecho y de derecho que se expondrán a continuación.

En este sentido, cabe señalar que el artículo 93 N°16 de la Constitución dispone en lo pertinente lo siguiente:

*“Artículo 93.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:*

*16°.- Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63.”*

*“En el caso del número 16°, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado.*

***En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad***

---

<sup>3</sup> Artículo 12, Decreto Supremo N°21, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.



***reglamentaria autónoma del Presidente de la República también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento***” (énfasis agregado).<sup>4</sup>

Por su parte, la LOC del Tribunal Constitucional establece que:

*“Artículo 31. Corresponderá al pleno del Tribunal:*

***11. Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República, cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63 de la Constitución Política de la República;***” (énfasis agregado).

*“Artículo 110. En el caso del número 16° del artículo 93 de la Constitución Política de la República, la cuestión podrá fundarse en cualquier vicio que ponga en contradicción el decreto con la Constitución.*

*Son órganos legitimados el Senado y la Cámara de Diputados y, en caso de que la cuestión se funde en un vicio distinto que exceder el ámbito de la potestad reglamentaria autónoma, también lo son una cuarta parte de los miembros en ejercicio de cualquiera de las Cámaras. Son órganos constitucionales interesados el Presidente de la República y el Contralor General de la República.*

*En todo caso, la cuestión deberá promoverse dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del decreto impugnado.*

*La substanciación de estas cuestiones se regirá, en lo pertinente, por las disposiciones del Párrafo 4 y por las normas del artículo siguiente.*” (énfasis agregado).

*“Artículo 111. Para ser admitido a tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas en el inciso primero del artículo 63 y a él deberá acompañarse la publicación del decreto impugnado.*

*Procederá declarar la inadmisibilidad de la cuestión, en los siguientes casos:*

- 1. Cuando el requerimiento no es formulado por un órgano legitimado;***
- 2. Cuando se promueva extemporáneamente;***

---

<sup>4</sup> Artículo 93 inciso décimo noveno de la Constitución.

**3. Cuando se funde en vicios de ilegalidad, y**

**4. Cuando se alegue exceso de la potestad reglamentaria autónoma y no fuere promovida por una de las Cámaras.**

*El Tribunal deberá resolver dentro de treinta días, contados desde que quede terminada la tramitación. Podrá prorrogar este plazo hasta por quince días, mediante resolución fundada, si existen motivos graves y calificados.*

*La sentencia que acoja el requerimiento deberá publicarse en la forma y plazo señalados en el artículo 40. Sin embargo, con el solo mérito de la sentencia que acoja el requerimiento, el decreto quedará sin efecto de pleno derecho” (énfasis agregado).*

**2. El presente requerimiento cumple con todos los requisitos necesarios para que sea acogido a tramitación**

Este requerimiento cumple con todos los requisitos necesarios para que sea acogido a tramitación por el Excmo. Tribunal, y que se desprenden de la Constitución y la LOC del Tribunal Constitucional, ya que:

- i. Contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que le sirven de apoyo.

En efecto, el Capítulo III denominado “**VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO IMPUGNADO**”, desarrolla de modo razonado y completo – fundándose en doctrina y jurisprudencia– los fundamentos de hecho y derecho en que se sustenta.

En este sentido, el Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que el control de constitucionalidad que el Tribunal ejerce sobre los decretos supremos es amplio, sosteniendo que “*el control se extiende tanto a los decretos dictados en **ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma como a los dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución**, sean éstos de efectos generales o particulares, y respecto a la causa que hace procedente el control, la Constitución señala de modo explícito que el Tribunal tiene competencia para conocer de la cuestión de constitucionalidad **`cualquiera sea el vicio invocado`**. Esta amplitud del examen que le corresponde efectuar al Tribunal Constitucional al ejercitar el control de constitucionalidad de los decretos supremos se condice con la exigencia que el artículo 1º, inciso cuarto, de la Carta Fundamental impone al Estado en el*

*cumplimiento de su misión servicial y que no es otra que el mismo actúe `con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece`"(énfasis agregado).<sup>5</sup>*

Adicionalmente, es relevante destacar que el Excmo. Tribunal Constitucional ya ha sido explícito en señalar que no existen otros requisitos más que los dispuestos en la Constitución y la propia LOC del Tribunal Constitucional para declarar su admisión a trámite y admisibilidad. Así, refiriéndose expresamente al control de constitucionalidad sobre decretos supremos, el Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que ***“restringir el acceso a esta Magistratura estableciendo exigencias no contempladas en el ordenamiento constitucional no se concilia con el espíritu de la Carta Fundamental, que es el permitir que las personas y órganos legitimados puedan recurrir en forma expedita ante ella, a fin de que pueda velar por el principio de supremacía constitucional cuya custodia le ha sido encomendada”*** (énfasis agregado).<sup>6</sup>

- ii. Señala con precisión la cuestión de constitucionalidad y los vicios que se aducen, identificando claramente las normas que se estiman transgredidas.

Este requerimiento señala de manera **precisa y categórica** tanto las normas específicas del Decreto Supremo contra el que se dirige, así como los vicios de inconstitucionalidad alegados, y las disposiciones constitucionales que resultan vulneradas por el mismo.

En efecto, tal como se desarrolla extensamente en el presente requerimiento, la cuestión de constitucionalidad que ponemos bajo el conocimiento del Excmo. Tribunal Constitucional es la inconstitucionalidad del artículo 12° inciso quinto del Decreto Supremo N°21, por vulnerar los artículos **6°, 7°, 19° numeral 1, 2, 3, y 4, 32° numeral 6, y 63° numeral 4 de la Constitución Política de la República.**

- iii. Se acompaña una copia del Decreto Impugnado.

Se adjunta en el primer otrosí copia íntegra del Decreto Impugnado, firmado con fecha 26 de mayo de 2024, y publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de julio de 2024.

Con todo, queda de manifiesto que se han cumplido todos los requisitos exigidos para que este requerimiento sea acogido a tramitación.

---

<sup>5</sup> STC 740, c. 9. En el mismo sentido, STC1153, c. 15 a 17.

<sup>6</sup> STC 1288, c. 27.

3. Este requerimiento cumple con todos los requisitos necesarios para que sea declarado admisible

Verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para que, este requerimiento sea acogido a trámite, corresponde ahora referirse a la admisibilidad de este requerimiento. Así, es posible sostener que:

- i. Ha sido formulado por un órgano legitimado.

Este requerimiento se funda en vicios **distintos** al exceso de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República. En efecto, las vulneraciones alegadas dicen relación con la afectación precisa y categórica del artículo 12° inciso quinto del Decreto Impugnado, de las disposiciones contenidas en los 6°, 7°, 19° numeral 1, 2, 3, y 4, 32° numeral 6, y 63° numeral 4 de la Constitución, y la aplicación que de dichas disposiciones ha realizado la propia jurisprudencia del Excmo. Tribunal Constitucional.

En este sentido, y de acuerdo con el artículo 93° inciso décimo noveno de la Constitución Política, y el artículo 110 de la LOC del Tribunal Constitucional, constituyen órganos legitimados, **una cuarta parte de los miembros en ejercicio del Senado o la Cámara de Diputados.**

Así las cosas, el requerimiento cumple con acompañar en el segundo otrosí de esta presentación, la certificación del Senado que da cuenta de la presentación de [●] Honorables Senadores de la República, con lo que se cumple el requisito de presentar un requerimiento por más de una cuarta parte del Senado según lo dispone la Constitución y la LOC del Tribunal Constitucional, en las disposiciones ya citadas.

- ii. Ha sido deducido dentro de plazo.

Se acompaña en el primer otrosí de esta presentación, la publicación del Decreto Impugnado en el Diario Oficial con fecha **3 de julio de 2024** (CVE 2514667). De esta forma, se acredita que este requerimiento ha sido interpuesto dentro del plazo de 30 días siguientes a la publicación del texto impugnado, establecido en el artículo 93° inciso décimo noveno de la Constitución.

- iii. Se funda en un vicio de inconstitucionalidad y no de legalidad.

Finalmente, esta presentación consigna los hechos, los fundamentos de derecho y la expresa identificación de graves vicios de inconstitucionalidad del Decreto Impugnado. **En efecto, las vulneraciones alegadas dicen relación con la afectación precisa y categórica del Decreto Impugnado a las disposiciones de los artículos 6°, 7°, 19° numeral 1, 2, 3, y 4, 32° numeral 6, y 63° numeral 4, todos de la Constitución Política de la República.**

De esta manera, **en ningún caso** este requerimiento tiene por objeto impugnar la legalidad o interpretación legal del Decreto Impugnado a la luz de la normativa infra constitucional aplicable.

Por tanto, como S.S. Excma. puede apreciar, se cumplen en este caso los requisitos de admisibilidad del requerimiento que han establecido la Carta Fundamental y la LOC del Tribunal Constitucional.

### **CAPITULO III**

#### **VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 12° INCISO QUINTO DEL DECRETO SUPREMO N°21**

##### **1. Breve explicación del contexto referido al artículo 12° inciso quinto del Decreto Supremo N°21.**

Como ya se ha señalado previamente, la Ley N° 21.643 establece en su artículo 211-B bis que: *“En caso de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, la persona afectada deberá hacer llegar su denuncia por escrito o de manera verbal a la empresa, establecimiento o servicio, o a la respectiva Inspección del Trabajo. Si la denuncia es realizada verbalmente, la persona que la reciba deberá levantar un acta, la que será firmada por la persona denunciante. Una copia de ella deberá entregarse a la persona denunciante.”* (énfasis agregado)<sup>7</sup>.

De esta forma, el legislador otorga un derecho de opción en favor de la persona afectada por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, facultándola para presentar la respectiva denuncia ante distintas instituciones, conforme a la preferencia o conveniencia del denunciante, a saber: **(i)** la empresa; **(ii)** el establecimiento; **(iii)** servicio; o **(iv)** la respectiva Inspección del Trabajo.

---

<sup>7</sup> Artículo 211-B bis, Ley N°21.463.

Este derecho alternativo, establecido en la Ley N° 21.643, faculta a la persona afectada para presentar la respectiva denuncia por la vía que considere más adecuada o efectiva para su caso en específico. Esta posibilidad de elección es indispensable para que las denuncias sean recibidas y gestionadas conforme a las necesidades particulares de los trabajadores afectados por conductas de abuso sexual, laboral o violencia en el trabajo.

Por su parte, el artículo 211-B de la Ley N° 21.643, ordena al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, dictar un reglamento de ejecución que **detalle** las directrices a las que deberán ajustarse las investigaciones en esta materia.

Como es de conocimiento de S.S. Excm. el referido acto administrativo corresponde al “Reglamento que define las directrices para los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral, o de violencia en el trabajo”, contenido en el Decreto Supremo N° 21, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual -tal como se ha expuesto previamente-, introdujo la siguiente innovación en su **artículo 12° inciso quinto**, respecto del **artículo 211-B de la Ley N° 21.643**, relevante para efectos de este requerimiento de inconstitucionalidad:

*“Tratándose de una denuncia dirigida a aquellas personas señaladas en el artículo 4° inciso primero del Código del Trabajo, la denuncia siempre deberá ser derivada a la Dirección del Trabajo para su investigación”*  
(énfasis agregado)<sup>8</sup>.

En consecuencia, el referido Reglamento se aparta de su objeto originario, destinado a detallar las directrices a las que deben ajustarse las investigaciones en las materias ya señaladas, por cuanto elimina el derecho del trabajador afectado de decidir presentar su denuncia en forma interna en la empresa, el establecimiento o servicio, exigiéndose siempre su investigación ante la Dirección del Trabajo, cuando la denuncia sea dirigida en contra de algunos de los trabajadores contemplados en el artículo 10° del Código del Trabajo.

## **2. Antecedentes y descripción de los aspectos constitucionales del Decreto Impugnado**

---

<sup>8</sup> Artículo 12, Decreto Supremo N°21, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

- i. El artículo 12° inciso quinto del Decreto Impugnado vulnera el principio constitucional de reserva legal y los preceptos constitucionales que la protegen.

La alusión a la vulneración principio constitucional de reserva legal no es antojadizo, pues éste constituye una piedra angular del Estado de Derecho. Su función es, precisamente, delimitar la órbita de atribuciones y competencias del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Como se ha expuesto a lo largo del presente requerimiento, el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución, ha transgredido y pretendido ampliar sus competencias regulando aspectos que corresponden a una ley general, conforme a lo establecido en el **artículo 63° numeral 4 de la Constitución**, que manifiesta el principio constitucional de reserva legal en este ámbito:

*“Sólo son materia de ley: 4) Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social”<sup>9</sup>.*

La Constitución ha dotado expresamente al Presidente de la República del ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución, entendiendo por tal aquella destinada a “dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”<sup>10</sup>. Así también lo ha entendido también el Excmo. Tribunal Constitucional al afirmar que la potestad reglamentaria de ejecución no se encuentra excluida por el principio de reserva legal, salvo en los casos en que la propia Constitución ha dispuesto que sólo la ley puede regular cierta materia o disponer en ciertas cuestiones<sup>11</sup>.

De tal forma, la potestad reglamentaria de ejecución tiene por objeto la dictación de las normas que estime necesarias para **desarrollar, detallar, y complementar las disposiciones legales**, a fin de garantizar su óptima ejecución, sin embargo, esta potestad se subordina a la ley, en tanto existe para asegurar su plena y efectiva aplicación<sup>12</sup>. Así, la potestad reglamentaria de ejecución sólo puede pormenorizar las materias o contenidos que se disponen la ley, para una mejor aplicación de esta, pero en **ningún caso puede modificar o incorporar elementos adicionales no previstos por el legislador**.

En este sentido, el Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado en diversas oportunidades que el rol de la normativa administrativa es concebido para “regular **cuestiones de detalle**,”

---

<sup>9</sup> Artículo 63 N°4, Constitución Política de la República.

<sup>10</sup> Artículo 31 N°6, Constitución Política de la República.

<sup>11</sup> STC 480, c.13-19.

<sup>12</sup> Poblete O., Domingo, y Otros (2021). Conceptos Fundamentales para el Debate Constitucional. Ediciones Universidad Católica de Chile, p.287.

de relevancia secundaria o adjetiva, cercana a situaciones casuísticas o cambiantes, respecto de todas las cuales la generalidad, abstracción, carácter innovador y básico de la ley impiden o vuelven difícil regular” (énfasis agregado)<sup>13</sup>.

Conforme a lo indicado precedentemente, la modificación introducida por el artículo 12° inciso quinto del Decreto Impugnado, se aparta del objetivo de la Ley N° 21.643, al introducir modificaciones que no son parte de la órbita de sus atribuciones. El mandato otorgado por la Ley N° 21.643 al Poder Ejecutivo se circunscribe exclusivamente a la dictación de directrices para los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral, o de violencia en el trabajo, sin que por esta vía pueda extenderse más allá, o contradecir de modo alguno, las materias objeto de dicha ley.

El Excmo. Tribunal Constitucional ha establecido su criterio en este sentido, en cuanto a que las disposiciones legales que regulen el ejercicio de derechos constitucionales en el ordenamiento jurídico, no pueden afectar la esencia, ni imponerle condiciones, tributos o requisitos que impidan el libre ejercicio de los referidos derechos: *“Cumplidas que sean dichas exigencias, es posible y lícito que el Poder Ejecutivo haga uso de su potestad reglamentaria de ejecución, pormenorizando y particularizando, en los aspectos instrumentales, la norma para hacer así posible el mandato legal”*. (énfasis agregado)

En síntesis, si bien en el artículo 211-B de la Ley N°21.643 el legislador consideró la colaboración de la potestad reglamentaria de ejecución, no habilitó al Poder Ejecutivo a regular materias que la propia Constitución reserva a la ley, o a contravenir mediante normas infra-legales las disposiciones contenidas en su texto. En dicha circunstancia, el Poder Ejecutivo no se cuenta con una habilitación legal, previa y suficiente para modificar a través de un reglamento las materias propias de ley, y por ende, la norma impugnada se torna en inconstitucional.

- ii. El artículo 12° inciso quinto del Decreto Impugnado vulnera el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución.

El artículo 12° inciso quinto del Decreto Impugnado altera la igualdad ante la ley, en los términos establecidos en el artículo 19° numeral 2 de la Constitución, al eliminar el derecho de opción de los trabajadores consagrado en la Ley N°21.643, para optar por la presentación de una denuncia por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, en la empresa, establecimiento o servicio, según corresponda, cuando la denuncia sea dirigida a aquellas

---

<sup>13</sup> STC 8865, c.22. En el mismo sentido, STC 282, c.18; STC 1669 c. 54, STC 2069 c. 35 y 36, STC 2367 c. 60.



personas señaladas en el **artículo 4º inciso primero del Código del Trabajo**, obligándose, en dicho caso, a presentar siempre la denuncia ante la Dirección del Trabajo.

Esta innovación del Reglamento Impugnado introduce una diferenciación no prevista por el legislador, que vulnera directamente la igualdad ante la ley y la proscripción de la discriminación arbitraria, al tratar de manera diferente, y sin justificación, el procedimiento de denuncia cuando ésta sea dirigida a las personas señaladas en el artículo 4º del Código del Trabajo.

El artículo 4º del Código del Trabajo establece que:

*“Para los efectos previstos en este Código, se presume de derecho que **representa al empleador** y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, **el gerente, el administrador, el capitán de barco y, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica**”. (énfasis agregado)*

De esta forma, el alcance de la disposición impugnada es ambigua y poco certera, toda vez que la propia Dirección del Trabajo ha interpretado de manera amplia el alcance del concepto de “gerente” o “administrador”, asociando a tal concepto *“la concurrencia de dos factores; i) disponer de facultades de representación del empleador, y ii) encontrarse dotados de facultades generales de administración”*<sup>14</sup>

En consecuencia, la coerción del derecho de los trabajadores se vuelve aún más gravosa al no delimitarse de forma clara y específica en qué casos es mandatorio para el afectado presentar una denuncia ante la Dirección del Trabajo, para su investigación, y en qué casos podrá efectuarlo directamente en la empresa, establecimiento o servicio.

En este sentido, es pertinente recordar que la igualdad ante la ley consiste en que “ [...] *las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias (...)*”.<sup>15</sup> Dado lo anterior, “(...) *no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no benefician o graven a otros que se hallen en condiciones similares*”.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Dictamen N°84/04, Dirección del Trabajo.

<sup>15</sup> STC 784, c. 19. En el mismo sentido, STC 1254, c. 46, STC 1399 c. 12, STC 1732, c. 48, STC 1812, c. 26, STC 1951, c.15.

<sup>16</sup> STC 811, c. 18.

A este respecto, el Poder Ejecutivo vulnera la igualdad ante la ley, porque exige al trabajador afectado por abuso o violencia laboral, interponer la denuncia ante la Dirección del Trabajo, cuando se dirija en contra de las personas mencionadas en el artículo 4° del Código del Trabajo, generando un procedimiento más expuesto, con menos garantías de celeridad, y coartando su libertad de activar los protocolos internos de la empresa, establecimiento o servicio, si así lo deseara.

De esta forma, se establece una discriminación arbitraria, entre quienes son afectados por conductas de abuso o violencia laboral por personas contempladas en el artículo 4° del Código del Trabajo, y quienes no lo son, estableciendo un gravamen adicional para el trabajador afectado en el primer caso. Al respecto, el Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que constituye una discriminación arbitraria aquella que contempla “*una diferencia irracional o contraria al bien común*”<sup>17</sup>, como ocurre en el presente caso, en donde no existe una justificación racional o razonable para tal limitación.

- iii. El artículo 12° inciso quinto del Decreto Impugnado vulnera el derecho a la integridad psíquica, y al respeto y protección de la honra del trabajador, consagrados en los artículos 19° numeral 1 y 4 de la Constitución, respectivamente.

El derecho de opción del trabajador es una cuestión esencial para garantizar adecuadamente la dignidad del trabajador. Por ello, el Decreto Impugnado claramente vulnera las garantías establecidas en el artículo 19° numerales 1 y 4, que reconocen los derechos a la integridad física y psíquica, y al respeto y protección de la honra del trabajador, respectivamente.

El Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que:

*“La integridad psíquica es una dimensión de la persona humana que, junto con la integridad física, la integra en plenitud. Ninguna de las dos puede ser descuidada, puesto que ambas componen al individuo en su relación con el entorno social más próximo. Se trata entonces de aspectos que no pueden separarse, que conforman una sola unidad, y, por consiguiente, **es imperativo el respeto a ambas dimensiones**”.*

*“(…) afectar a la integridad psíquica de una persona conlleva importantes secuelas somáticas que dejan huellas indelebles en ella. Por tanto, en su*

---

<sup>17</sup> STC 811, c. 20. En el mismo sentido STC 1204, c.19

*protección, renace la idea de dignidad humana, la cual se opone a todo intento o práctica vulneratoria de la integridad de la persona.”<sup>18</sup> (énfasis agregado)*

En efecto, el artículo 12º inciso quinto del Decreto Impugnado transgrede y vulnera el derecho constitucional a la integridad psíquica de los trabajadores afectados: En muchas oportunidades, el trabajador querrá realizar y tramitar la denuncia de acoso internamente, para no difundir su incómoda y difícil situación. Para ello, el deber tramitar dicha denuncia necesariamente ante la Inspección del Trabajo produce un efecto contrario a estas garantías, pues el resguardo de los derechos a la integridad y a la honra muchas veces será más efectivo mediante la tramitación de la investigación dentro de la propia empresa.

Por otro lado, el Excmo. Tribunal Constitucional ha entendido el respeto y protección del derecho a la honra como “*sinónimo de derecho al respeto y protección del “buen nombre” de una persona, derecho de carácter personalísimo que es expresión de la dignidad humana consagrada en el art. 1º CPR. Se trata, en definitiva, de un bien espiritual que, no obstante tener en ocasiones valor económico, la principal pérdida es moral*”<sup>19</sup>.

De esta forma, y como se ha expuesto a lo largo del presente requerimiento, el Decreto Impugnado vulnera las citadas garantías constitucionales, mediante la exposición del trabajador afectado a circunstancias más gravosas de las que estableció la Ley N°21.643 en la investigación de denuncias por acoso o violencia laboral.

- iv. El artículo 12º inciso quinto del Decreto Impugnado vulnera el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, consagrados en el artículo 19º numeral 3 de la Constitución.

Tal como ha señalado en reiteradas oportunidades el Excmo. Tribunal Constitucional, la igualdad en la protección de la ley en el ejercicio de los derechos considera como “*presupuesto básico para su vigencia, el derecho de toda persona a ser juzgada, a presentarse ante el juez, a ocurrir al juez, **sin estorbos, gabelas o condiciones que se lo dificulten, retarden o impidan arbitraria o ilegítimamente***”<sup>20</sup>. (énfasis agregado)

---

<sup>18</sup> STC 2867, c.42

<sup>19</sup> STC 943 c. 28. En el mismo sentido, STC 2422 c. 8, STC 2747 c. 14, STC 2801 c. 14, STC 2887 c. 15, STC 2860 c. 9, STC 3194 c. 6.

<sup>20</sup> STC 792 c. 8. En el mismo sentido, STC 815 c. 10, STC 946 c. 28 a 33, STC 1046 c. 20, STC 1061 c. 15, STC 1332 c. 9, STC 1356 c. 9, STC 1382 c. 9.

Es de conocimiento público que la mayoría de los casos por denuncia de acoso o violencia laboral son ascendentes, es decir, el denunciado por regla general es la jefatura. De esta forma, la limitación impuesta por el artículo 12° inciso 5 del Decreto Impugnado, establece condiciones que dificultan y retardan un acceso óptimo y eficiente a la justicia, toda vez que la Dirección del Trabajo se verá recargada de trabajo, porque la mayoría de las denuncias deberán ser tramitadas en dicha sede.

La propia Ley N°21.643, en su artículo 211-B bis, establece como uno de los principios de todo procedimiento de investigación, la **celeridad**, lo que no ocurre con las fiscalizaciones e investigaciones realizadas por la Dirección del Trabajo, motivo por el cual no se cumplirían con los plazos máximos establecidos en la norma para concluir el procedimiento de investigación, esto es 30 días, provocando mayor incertidumbre y problemas entre empleadores y trabajadores.

En este punto, el Poder Ejecutivo hace caso omiso a la carga de trabajo de la Dirección del Trabajo, en perjuicio del trabajador afectado, quien deberá exponerse a lentos procedimientos de investigación para hacer responsable a los denunciados, mermando su acceso a la justicia al privarlo del derecho de opción reconocido en la Ley N°21.643

En síntesis, el artículo 12° inciso quinto del Decreto Impugnado es inconstitucional, porque vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, toda vez que el Ejecutivo ejerce la potestad reglamentaria de ejecución infringiendo el deber constitucional de resguardar y promover el respeto a los derechos constitucionales consagrados en los numerales 1, 2, 3 y 26, todos del artículo 19° de la Constitución.

El inciso primero del artículo 19° de la Constitución establece un mandato imperativo de asegurar a todas las personas la promoción de los derechos constitucionales, lo que, en el caso expuesto no es respetado.

**POR TANTO**, con el mérito de lo expuesto, así como en virtud de las disposiciones constitucionales citadas, especialmente lo dispuesto en el artículo 93° inciso primero numeral 4, e inciso décimo noveno de dicho artículo de la Constitución Política de la República y de acuerdo con lo indicado en el artículo 31° numeral 11, artículo 110° y siguientes de la LOC del Tribunal Constitucional,

**A S.S. EXCMA. PEDIMOS**, se sirva tener por interpuesto este requerimiento, darle curso y, en definitiva, acogerlo íntegramente, declarando la inconstitucionalidad del artículo 12° inciso quinto del Decreto Supremo N°21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,

publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de julio de 2024, que aprueba el Reglamento que establece las directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, por contravenir los artículos 6º, 7º, 19º numeral 1, 2, 3, y 4, 32º numeral 6, y 63º numeral 4, todos de la Constitución Política de la República.

**PRIMER OTROSÍ:** Pedimos a S.S. Excma. tener por acompañados los siguientes documentos:

- a) Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111 de la LOC del Tribunal Constitucional, se acompaña íntegramente el Decreto Supremo N°21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 26 de mayo de 2024, que *“Aprueba el Reglamento que define las directrices para los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral, o de violencia en el trabajo”*, objeto del presente requerimiento; y
- b) Publicación del Decreto Supremo N°21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el Diario Oficial de fecha 3 de julio de 2024 (CVE 2514667).

**POR TANTO,**

**A S.S. EXCMA. PEDIMOS:** Tenerlos por acompañados.

**SEGUNDO OTROSÍ:** Pedimos a su S.S Excma. tener por acompañada la certificación del señor Secretario General del Senado, de fecha [●], acreditando tanto las identidades de nosotros, Honorables Senadores de la República que patrocinamos el presente requerimiento, como también el que constituimos más de la cuarta parte de los Senadores en ejercicio, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 93 inciso décimo noveno de la Constitución en relación al numeral 16º del inciso primero del referido precepto.

**POR TANTO,**

**A S.S. EXCMA. PEDIMOS:** Tenerlo por acompañado.

**TERCER OTROSÍ:** Solicitamos a su S.S Excma, en este acto, para todos los efectos, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43º de la LOC del Tribunal Constitucional disponer que se oigan alegatos respecto del fondo del requerimiento que se deduce en lo principal de este escrito.

**POR TANTO,**

**A S.S. EXCMA. PEDIMOS:** Acceder a lo solicitado.

**CUARTO OTROSÍ:** Solicitamos a su S.S Excma., tener presente que para todos los efectos de la tramitación de este requerimiento designamos como nuestro representante al **Honorable Senador [●]**, domiciliado para estos efectos en el Congreso Nacional, Avenida Pedro Montt s/n Comuna de Valparaíso, y otorgamos patrocinio y poder a los abogados **Felipe Hübner Valdivieso**, cédula de identidad N°16.939.451-2, y **[●]**, cédula de identidad N° [●], todos debidamente habilitados para el ejercicio de la profesión y del mismo domicilio anterior, para que nos representen, pudiendo actuar conjunta o separadamente.

**POR TANTO,**

**A S.S. EXCMA. PEDIMOS:** Tenerlo presente.

**QUINTO OTROSÍ:** Solicitamos a su S.S Excma., que en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la LOC del Tribunal Constitucional, se sirva notificar las resoluciones que se dicten en el presente requerimiento a los siguientes correos electrónicos **[●]**.

**POR TANTO,**

**A S.S. EXCMA. PEDIMOS:** Acceder a lo solicitado.